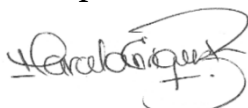


SECRETARÍA: San Juan de Pasto, 23 de octubre de 2025. En la fecha doy cuenta a la señora Jueza que, la presente acción de tutela fue remitida por la oficina de reparto para su conocimiento. Sírvese proveer.



LIGIA MARCELA ENRIQUEZ RUIZ
SECRETARIA.

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN: 52001310500420251009600
ACCIONANTE: ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO
ACCIONADA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

San Juan de Pasto, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO, actuando en nombre propio, interpone acción de tutela en contra de la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, al considerar que la entidad convocada ha vulnerado su derecho fundamental a ser elegido en condiciones de igualdad y transparencia, derecho a la igualdad y debido proceso administrativo.

De esta manera, una vez examinada la solicitud constitucional presentada, logra establecerse que la misma reúne los requerimientos exigidos por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, siendo procedente su admisión y el decreto probatorio necesario para su resolución.

Por otra parte, es necesario vincular al presente trámite a las **Registradurías Municipales de Albán, Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, El Charco, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santa Bárbara, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tumaco, Túquerres, Yacuanquer y Pasto**, para que se pronuncien respecto de los hechos que sustentan la acción de tutela y así mismo, aporten todos los documentos o soportes relacionados con el asunto de la referencia.

Asimismo, es necesario vincular a todos los **precandidatos inscritos dentro de la consulta de partidos 2025**, ya que la acción involucra las elecciones en las actúan como precandidatos y podría afectar sus derechos fundamentales.

Se ordenará a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, que publiquen en su página web la admisión y la existencia de la presente acción de

tutela, así como la vinculación de los precandidatos inscritos dentro de la consulta de partidos 2025 mencionada y de cualquier otro tercero que pueda ver afectado sus intereses con el desarrollo de este proceso.

Finalmente, es necesario vincular al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la POLICÍA NACIONAL Y AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NARIÑO**, para que se pronuncien respecto de los hechos que sustenta la acción de tutela y así mismo, aporten todos los documentos o soportes relacionados con el asunto de la referencia.

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

Ahora bien, el accionante solicita como medida provisional solicita que:

“En virtud de lo expuesto, y con el fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable que anularía el propósito mismo de esta acción constitucional, solicito respetuosamente a su Despacho que, como medida provisional, se sirva emitir órdenes perentorias e inmediatas a la entidad accionada. Concretamente, pido:

1. Se solicita ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que suspenda de inmediato la aplicación de cualquier acto administrativo, comunicación interna, o instrucción verbal o escrita que haya dispuesto el traslado de los puestos de votación rurales a las cabeceras municipales en los municipios de El Tablón de Gómez, Ospina, Policarpa, Samaniego, Linares, Chachagüí, Tangua, Puerres, Córdoba, Pasto y demás territorios listados en el Anexo 1 de esta tutela. La suspensión debe ser inmediata para frenar cualquier acto logístico que materialice el traslado.

2. Como consecuencia de lo anterior, se solicita ordenar a la Registraduría Departamental de Nariño que, en un término improrrogable de doce (12) horas contadas a partir de la notificación de la medida provisional, proceda a:

a. Adoptar todas las medidas administrativas, logísticas y de personal necesarias para garantizar la apertura y el pleno funcionamiento de todos los puestos de votación listados en el Anexo 1 en sus ubicaciones históricas y originales.

b. Coordinar de manera inmediata con el Ministerio de Defensa y el Departamento de Policía Nariño el despliegue del pie de fuerza necesario para asegurar las condiciones de seguridad en cada uno de dichos puestos de votación, cumpliendo así con el deber constitucional de proteger el ejercicio del voto en todo el territorio”.

Frente a lo anterior, es pertinente indicar que la medida provisional tiene como núcleo esencial evitar que el fallo de tutela sea ineficaz con respecto a la vulneración y/o amenaza de derechos fundamentales, su concesión depende los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que adopte el juez de tutela.

Al respecto, se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en auto 753 de 2021, al señalar:

“Las medidas provisionales son órdenes preventivas que pueden ser adoptadas de oficio o a petición de parte, mientras el juez toma una decisión definitiva en el

asunto respectivo. Esto, con el propósito de “evitar que la amenaza que se cierne sobre un derecho fundamental se convierta en una vulneración o que la afectación se vuelva más gravosa”¹ (Énfasis añadido)

Más recientemente en Auto A-438/24 señaló unos requisitos de procedencia para solicitar medidas provisionales en tutela:

(...) la procedencia de la adopción de medidas provisionales se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes exigencias: (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris); (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección constitucional pretendida pueda verse afectada considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y (iii) Que la medida provisional solicitada no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

En este caso, considera el actor la viabilidad de la medida entre tanto las elecciones se efectuarán el día 26 de octubre de 2025, por ende, siendo que la tutela se presentó en horas de la tarde del 23 de octubre, es evidente que, durante el trámite, esto es el término de 10 días que se tiene para fallar, la protección solicitada carecería de efectos. No obstante, esta no es la única exigencia que se debe cumplir para efectos de que proceda el decreto de la medida solicitada.

En efecto, el accionante presenta la tutela como aspirante en las elecciones programadas para el 26 de octubre de 2025, y considera sus derechos fundamentales ales como ser elegido en condiciones de igualdad y transparencia, derecho a la igualdad y debido proceso administrativo, vulnerados entre tanto indica tiene conocimiento que algunos puntos de votación serán trasladados a las cabeceras municipales. No obstante, en este caso no se evidencia la apariencia de buen derecho que se exige para que proceda la medida por dos razones:

La primera, es que no se basa en fundamentos facticos posibles. En efecto, este Despacho no cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan acreditar el presunto traslado de los puestos de votación mencionados en el escrito de tutela. En efecto el despacho procedió a realizar las consultas correspondientes, en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (<https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/atipicas/consultas-populares/puestos-de-votacion/>), en la cual se verifica que los puestos de votación de algunos municipios señalados por el accionante como trasladados, como son los municipios de El Rosario, El Tablón, Ospina, Samaniego, Colon (Genova) y La Unión, continúan registrados en sus ubicaciones habituales.

Así mismo, al revisar las comunicaciones oficiales emitidas por dicha entidad, no se encontró información alguna que indique la realización de traslados respecto de los puestos de votación referidos por el actor.

Por lo tanto, si bien en el folio 179 del escrito de tutela se allega un oficio que presuntamente habría sido dirigido por la Registraduría Nacional del Estado Civil a

¹ Auto 753 del 08 de octubre de 2021 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado

la Alcaldía Municipal de La Unión, mediante el cual se informa sobre unos supuestos traslados de puestos de votación, dicho documento carece de firma o sello que permita verificar su autenticidad y, por tanto, la procedencia institucional de la Registraduría Nacional. Así, no constituye prueba suficiente para acreditar el traslado de algunos puestos de votación del Municipio de la Unión y menos la totalidad de los traslados que el accionante afirma se realizaron.

De igual forma, entre los anexos del escrito de tutela se incluye un enlace a una carpeta de Google Drive, en formato Excel, en la que se indica que reposa la *“DIVISIÓN POLÍTICA DIVIPOLE DE LA REGISTRADURÍA DONDE SE EVIDENCIA REUBICACIÓN DE PUESTOS DE VOTACIÓN DE ZONAS RURALES A CABECERAS MUNICIPALES”*. No obstante, al acceder al archivo, no se observa certificación alguna que acredite que dicho documento sea oficial o haya sido emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, motivo por el cual carece de valor probatorio dentro del presente trámite.

De esta manera, el presunto traslado de los puestos de votación no se encuentra debidamente acreditado, toda vez que, como se indicó anteriormente, la consulta realizada en la página oficial de la entidad accionada evidencia que los puestos de votación rurales mencionados en el escrito de tutela continúan registrados en sus ubicaciones habituales. En consecuencia, ante la ausencia de prueba clara y suficiente que demuestre la ocurrencia de los hechos alegados como vulneratorios o una amenaza frente a los mismos, no es posible conceder la medida solicitada.

En segundo lugar, no se evidencia que exista apariencia de buen derecho por cuanto, si en gracia de discusión se aceptara que los puestos de votación fueron efectivamente reubicados o trasladados, este Despacho considera que ello no configuraría una amenaza ni una vulneración a los derechos fundamentales del actor, tales como el derecho a ser elegido en condiciones de igualdad y transparencia y el derecho a la igualdad.

En todo caso, de presentarse alguna afectación, esta recaería sobre la población rural en su derecho al sufragio, por lo que serían dichos ciudadanos quienes ostentarían la legitimación en la causa por activa para promover las acciones correspondientes.

En cuanto a los derechos del actor a ser elegido en condiciones de igualdad y transparencia, y a la igualdad, este Despacho no advierte afectación alguna, puesto que el derecho a ser elegido se garantiza mediante su participación como precandidato en la consulta prevista para el próximo 26 de octubre de 2025. De igual forma, el derecho a la igualdad no se ve comprometido, dado que, en caso de haberse efectuado los traslados, estos tendrían las mismas consecuencias para todos los precandidatos que participen en el proceso electoral.

El actor manifiesta que se vería particularmente afectado en mayor medida que los demás precandidatos, argumentando que, en las elecciones pasadas a la Cámara de Representantes, en las cuales resultó elegido, obtuvo una votación significativa en los puestos de votación rurales de algunos municipios de Nariño que presuntamente serían trasladados. Sin embargo, aun cuando aporta documentos técnicos sobre los resultados electorales obtenidos en comicios anteriores, ello no constituye prueba de

una vulneración a su derecho a la igualdad, toda vez que las posibles consecuencias del traslado serían generales y no exclusivas de su candidatura.

Adicionalmente, no puede asumirse que los resultados de la consulta actual serán equivalentes a los de procesos electorales anteriores, puesto que las condiciones políticas, sociales y electorales varían en cada contienda, y los ciudadanos conservan plena libertad para ejercer su derecho al voto conforme a sus propias convicciones.

En consecuencia, sostener que sus derechos fundamentales se verían afectados por la eventual reubicación de los puestos de votación en los que obtuvo altos porcentajes de votación en procesos pasados no resulta atendible para este Despacho y, por ende, no constituye razón suficiente para acceder a la medida cautelar solicitada.

Tampoco se advierte una amenaza al derecho al debido proceso administrativo del actor de tal entidad que justifique el decreto de la medida cautelar solicitada, toda vez que, como se expuso anteriormente, no obra en el expediente prueba plena que acredite la realización del presunto traslado de los puestos de votación. Aun en el evento de que dicho traslado llegare a efectuarse, no se cuenta con el correspondiente acto administrativo que lo disponga, lo cual impide a este Despacho valorar las circunstancias en que fue emitido, las razones que motivaron tal decisión y, en consecuencia, verificar si en su expedición se observaron las garantías propias del debido proceso administrativo.

Debe recordarse, que la medida provisional únicamente procede de **manera excepcional**, siempre que se constate sin lugar a dudas que hay razones de necesidad suficientes para ordenarla. Al respecto, la honorable Corte Constitucional, ha señalado que ***“El decreto de medidas provisionales en el trámite de tutela es excepcional. El juez de tutela debe velar por su aplicación “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada” y debe constatar que “existan razones suficientes que sustenten la necesidad de dictarlas”***² (Énfasis añadido).

Bajo tales consideraciones, este Despacho estima que las razones de necesidad invocadas por el accionante no resultan suficientes para justificar el otorgamiento de la medida provisional solicitada. En efecto, no se han aportado elementos probatorios que demuestren la urgencia o la inminencia del perjuicio alegado, ni que permitan acreditar la necesidad de adoptar una medida cautelar para la protección inmediata de los derechos invocados. La ausencia de pruebas plenas sobre los hechos que presuntamente configuran la vulneración de los derechos fundamentales del tutelante impide a este Despacho realizar una valoración positiva de la necesidad de la medida. En consecuencia, no es posible acceder al decreto de la medida provisional solicitada.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PASTO**,

RESUELVE

PRIMERO- ADMITIR la acción de tutela presentada por **ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO**, actuando en nombre propio, contra de la

² Auto 753 del 08 de octubre de 2021 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a través de sus directores y/o quienes hagan sus veces.

SEGUNDO- VINCULAR al presente trámite a las **REGISTRADURÍAS MUNICIPALES DE ALBÁN, ALDANA, ANCUYA, ARBOLEDA, BARBACOAS, BELÉN, BUESACO, CHACHAGÜÍ, COLÓN, CONSACÁ, CONTADERO, CÓRDOBA, CUASPU, CUMBAL, CUMBITARA, EL CHARCO, EL PEÑOL, EL ROSARIO, EL TABLÓN DE GÓMEZ, EL TAMBO, FRANCISCO PIZARRO, FUNES, GUACHUCAL, GUAITARILLA, GUALMATÁN, ILES, IMUÉS, IPIALES, LA CRUZ, LA FLORIDA, LA LLANADA, LA TOLA, LA UNIÓN, LEIVA, LINARES, LOS ANDES, MAGÜÍ PAYÁN, MALLAMA, MOSQUERA, NARIÑO, OLAYA HERRERA, OSPINA, POLICARPA, POTOSÍ, PROVIDENCIA, PUERRES, PUPIALES, RICAURTE, ROBERTO PAYÁN, SAMANIEGO, SAN BERNARDO, SAN LORENZO, SAN PABLO, SAN PEDRO DE CARTAGO, SANDONÁ, SANTA BÁRBARA, SANTACRUZ, SAPUYES, TAMINANGO, TANGUA, TUMACO, TÚQUERRES, YACUANQUER Y PASTO**, para que se pronuncie respecto de los hechos que sustenta la acción de tutela.

TERCERO- VINCULAR al presente trámite a los **precandidatos inscritos dentro de la consulta de partidos 2025**, para que se pronuncien respecto de los hechos que sustenta la acción de tutela y así mismo, aporte todos los documentos o soportes relacionados con el asunto de la referencia.

CUARTO- ORDENAR a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** que a través de su página web de a conocer la admisión, existencia de la presente acción de tutela y vinculación a los **PRECANDIDATOS INSCRITOS DENTRO DE LA CONSULTA DE PARTIDOS 2025** y a cualquier otro tercero que puedan ver afectados sus intereses con las resultas de este proceso.

QUINTO- VINCULAR al presente trámite a **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la POLICÍA NACIONAL Y AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NARIÑO**, para que se pronuncie respecto de los hechos que sustenta la acción de tutela.

SEXTO- REQUERIR a las accionadas y a las vinculadas, por sí mismas o través de sus representantes legales o quien haga sus veces, para que en el término perentorio de dos (02) días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, se sirvan contestar y rendir un informe sobre los hechos que motivan esta acción, anexando la documentación relacionada con los mismos.

SEPTIMO- PREVENIR a las requeridas, en el sentido que, los informes presentados ante este despacho judicial se considerarán rendidos **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** y, por lo tanto, en caso de que los mismos no sean aportados en el término señalado en incisos anteriores, se tendrán por ciertos los hechos manifestados por el accionante y se resolverá el presente debate constitucional de plano (Art. 20 del Decreto 2591 de 1991).

OCTAVO- NEGAR la medida cautelar solicitada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO
DE PASTO**

Cra 22 con calle 19 Esquina. Oficina 205.
Correo electrónico: j04lctopso@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOVENO- NOTIFICAR este proveído por el medio más expedito y eficaz a las partes intervinientes en la presente acción constitucional, conforme a lo previsto en el Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**JULY PAULINE OBANDO PAZ
JUEZ**